

El Gobierno deja atrás a las pymes



RADAR MÓVIL

Ricardo T. Lucas

Nos hemos hartado en los últimos meses de escuchar al Gobierno repetir machacadamente eso de que no van a dejar a nadie atrás en esta crisis. Pero año y medio después, además de la pérdida de más de 85.000 personas fallecidas por Covid-19 según las estadísticas oficiales –a las que habría que sumar las no registradas en la primera ola de contagios–, han desaparecido 44.640 empresas según la patronal Cepyme, con la pérdida de puestos de trabajo que eso conlleva. Una destrucción histórica del tejido empresarial que se ha cebado en la hostelería y el comercio al ser las actividades

económicas más afectadas por las restricciones sanitarias para contener los contagios. La sorprendente desaparición de numerosas calles de España de los bazares que regentaban ciudadanos chinos muestra la hondura del impacto de la pandemia en la economía real. Miles de pymes y autónomos de sectores no esenciales han visto desplomarse sus ingresos, sin los cuales mantener en marcha sus negocios es poco menos que una quimera. Como hizo con otros colectivos, el Gobierno les prometió un maná de ayudas públicas para sobrevivir a esta crisis, que anunciaban temporal y limitada. El paso de los meses ha demostrado que no era así y, aún peor, que esas promesas estaban huecas. Los errores en el diseño de las ayudas para pymes y autónomos por hasta 7.000 millones de euros aprobadas el pasado 12 de marzo

(como excluir a quienes tengan deudas con las Administraciones o limitar su uso al abono de facturas pendientes) y la descoordinación con las comunidades autónomas han forzado al Ejecutivo a solicitar a la Comisión Europea una prórroga para poder distribuir las más allá del 31 de diciembre, cuando expira el plazo dado por Bruselas. Las patronales denuncian que en los últimos seis meses no se han asignado ni la mitad de los fondos, a diferencia de lo que ha sucedido con las ayudas a grandes empresas. Mientras tanto, autónomos y pymes ven cómo sus márgenes se reducen todavía más por el encarecimiento de las materias primas y los carburantes, la mayor presión fiscal y la rápida escalada del precio de la electricidad, que ha supuesto para la mayoría de las pymes –no sólo empresas industriales, también ta-

lleres, peluquerías o farmacias– tener que pagar el doble que hace sólo un año en su factura de la luz. Y no porque hayan consumido más energía, como defiende falazmente el Gobierno, sino porque la energía es mucho más cara, sobre todo en las horas de mayor actividad comercial, tras la reforma del recibo puesta en marcha por la vicepresidenta ecológica, Teresa Ribera. El Ejecutivo hasta ahora las ha excluido de las medidas fiscales aprobadas para amortiguar la subida de la factura eléctrica, la segunda mayor de toda Europa, sólo superada por la de Grecia. Ante la falta de medidas que amortigüen su impacto sobre las cuentas de pymes y autónomos, las previsiones que apuntan que lo peor para los precios de la luz llegará en otoño han disparado la inquietud de los pequeños empresarios y profesionales. Por si fuera po-

co, éstos observan con pavor la frivolidad con que Pedro Sánchez y Yolanda Díaz anuncian una subida inmediata del salario mínimo con el argumento populista de lograr “una recuperación justa”. Porque tener que asumir una nueva subida por decreto de sus costes laborales, y de las cotizaciones a la Seguridad Social en el caso de los autónomos, daría la puntilla a muchos negocios que están en dificultades. El Gobierno parece ignorar que más del 70% de los puestos de trabajo en España lo generan las pymes, pese a lo cual nunca han estado entre sus prioridades. El de Pedro Sánchez es un Ejecutivo más preocupado por espolear operaciones de falsa bandera con las que ocultar su palmaria inoperancia que en solucionar los problemas reales de la economía española.

Jefe de Opinión de EXPANSIÓN